Globethics Repository



Costa Rica

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Vega Carballo, José Luis
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-11-07 05:20:40
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/220953

Nueva Sociedad Nro.97 Septiembre- Octubre 1988, pp. 6-11

Costa Rica: La pauta de un desarrollo ambiguo

Vega-Carballo, José Luis

José Luis Vega Carballo: Sociólogo político costarricense. Investigador del Programa CSUCA-PAX de la Confederación Universitaria Centroamericana. Asesor del Centro de Promoción Electoral (CAPEL) y de la Comisión sobre Democracia Económica y Social del Partido Liberación Nacional (PLN). Ha escrito varios libros.

Hasta el momento, Costa Rica no logra superar la crisis que detuvo su desarrollo a principios de esta década. La antigua "Suiza centroamericana" no ha mostrado en esto mas habilidad que otras sociedades que se hundieron en experimentos autoritarios teniendo semejantes pasados democráticos, como Uruguay y Chile. Tampoco han servido las lecciones de estos países lo suficiente como para que las élites costarricenses rectifiquen su trayectoria. Si bien es cierto que en comparación con el año 1982 se ha avanzado mucho en materia de estabilidad de los indicadores económicos de tipo monetario, financiero y cambiario y se ha sostenido la paz interior, los dilemas fundamentales del desarrollo nacional siguen planteados en medio de un prolongado estancamiento con visos de involución política. Muchos temen incluso una eventual "uruguayización" si no se corrigen los rumbos prontamente.

En primer lugar aparecen las presiones regresivas extensas, impuestas por la ofensiva neoconservadora lanzada desde Estados Unidos y Europa en la década pasada, las cuales se introyectaron rápida y acrípticamente, centrándose en el manejo de la abrumadora deuda externa, el cambio del modelo de desarrollo hacia uno de tipo Taiwan, con alejamiento de los procesos de integración regional centroamericana, y la promoción de la hegemonía del nuevo capital financiero transnacional. Los resultados han sido una reconcentración del ingreso en perjuicio de las clases medias y populares, sin lograr por ello una reactivación de la economía; pero tampoco se ha producido una desestabilización del sistema democrático.

Sin embargo, la aplicación persistente y agresiva de políticas neoliberales por parte del gobierno del presidente Arias, esta amenazando la continuidad del "pacto social" logrado a raíz de la guerra civil de 1948 y sobre el cual se asentó todo el andamiaje de la Segunda República y su Estado benefactor. Lo mas paradójico de esto es que ha sido durante dos sucesivas administraciones del Partido Liberación Nacional (PLN) vinculado a la corriente socialdemócrata internacional, cuando el pro-

yecto económico neoliberal se ha tornado prácticamente en hegemónico, con el apoyo explícito y dócil de una cómplice oposición aglutinada en el recientemente formado Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

EL dilema socialdemócrata

Si el acuerdo histórico de dominación, entre los antiguos sectores empresariales oligárquicos, las clases medias en ascenso y amplios sectores obreros y populares para impulsar una modernización "desde arriba" con crecimiento económico y redistribución progresiva del ingreso, se altera en beneficio de un poderoso bloque de fuerzas emergentes ligadas al capital financiero-exportador, es muy probable que el PLN verá modificarse la composición y el apoyo de sus bases sociales.

Al alejarse de las mayorías sociales compuestas por clases medias y populares, que lo llevaron a ser el gran partido dominante de la posguerra, el PLN deberá entonces buscar la constitución de una coalición distinta de fuerzas. Pero son estas fuerzas de probable sustentación las que mejor influencia y articula el PUSC, con lo cual se ponen en entredicho las posibilidades de un triunfo liberacionista para las elecciones de 1990. Y si esta pendulación hacia el eje centro-derecha no es factible ni deseable para el PLN, este partido deberá lograr que el gobierno de Arias rectifique el rumbo de sus políticas económicas antipopulares y desnacionalizantes, además de restrictivas e ineficaces para generar la reactivación.

Se trata de un importante dilema para la socialdemocracia costarricense, que sólo con un viraje así podría recuperar sus deterioradas bases electorales y reorganizarse bajo un nuevo liderazgo con distintas directrices y métodos de lucha. De otro modo se pondría en mayor peligro el largo predominio del PLN, en un momento histórico en que se esta produciendo una transición hacia un sistema de bipartidismo competitivo, con una oposición que se venía fortaleciendo rápidamente, aunque pocos creían que estuviera en tan buena capacidad como ahora de quebrar dicho predominio.

Es necesario preguntarse: ¿Por qué la experimentada dirigencia del PLN ha encarado este riesgo electoral y estratégico? ¿Por qué ha dejado de ser una coalición de poder progresista e innovadora para transformarse en un impedimento para la introducción de reformas estructurales como las que ella misma impuso con coraje entre 1950-1980?

Varias respuestas podrían ensayarse, pero todas parecieran coincidir en que las decisiones se han tomado dentro del marco de un acendrado temor a la subversión social y política que podría haber desatado, o puede todavía desatar, la recesión económica. Se levantó así una especie de "proyecto contrainsurgente" que tomando en consideración la necesidad de mantener ciertos rasgos del sistema político formal, se orientó unilateralmente hacia la contención y administración de la crisis, en vez de tomarla como inigualable oportunidad para profundizar cambios ya iniciados y emprender nuevos caminos hacia la democratización económica de la sociedad. El proyecto fue producto del enfrentamiento de opciones difíciles de conciliar, que constituían retos en medio de una encrucijada de fuerzas internas y externas encontradas.

Un contrarreformismo miope

En primer lugar, había que encarar los síntomas internos de desestabilización, que habían comenzado a darse entre 1980-1982, para lo cual la administración del presidente Monge (1982-1986) fortaleció los aparatos represivos del Estado, sin llegar al montaje de un "Estado de Seguridad Nacional", ni a nada por el estilo. Y para no abrir brechas por las cuales pudiera entrar el extremismo de izquierda, alentado por el triunfo sandinista en la contigua Nicaragua, en 1979, prefirió posponer todo afán reformista en aras de frenar los desequilibrios financieros y monetarios heredados de la administración Carazo (1978-1982). Era una manera de sostener el funcionamiento del semi-arruinado Estado Benefactor, para impedir despidos masivos de empleados públicos y mayores sacrificios de las clases medias y populares que podrían conducir a olas de incontrolable protesta social y a un cierre del sistema político democrático. Aún hoy día persiste la convicción de que es prioritario frenar un deterioro de la economía, casi a cualquier costo, para no permitir un colapso de las estructuras y programas sociales básicos de ese Estado. Las consecuencias han sido costosas.

El problema central a atacar se definió así como de carácter esencialmente económico y apareció fuertemente ligado a la obtención de recursos foráneos frescos, de mejores condiciones para la negociación de la deuda externa, y de concesiones del gobierno norteamericano y los organismos financieros internacionales, como los agentes capaces de dar contenidos y soportes a la estrategia. Pero poco a poco se supo que al entrar por esa ruta quedaba atrás cualquier otro proyecto de reformas estructurales de largo alcance aprovechando la crisis; por ejemplo, en el sector industrial o agropecuario (no a la reforma agraria y a la desprotección escalonada y selectiva). No se readaptó el aparato productivo a nuevas condiciones de competi-

tividad externa, basándose en modelos agroindustriales de mayor autonomía y escala (no al desarrollo integrado, autogenerado y autodirigido con efectos hacia afuera y hacia adentro).

Tampoco se facilitó la generación de nuevos mecanismos de redistribución del ingreso para evitar su concentración en los altos círculos privilegiados y desnacionalizantes (no al desarrollo social con democracia económica). Ni se aceleró el mejoramiento de la calidad del capital humano por sobre los requerimientos de la acumulación desenfrenada de los capitales privados especulativos (no al desarrollo productivo centrado en el factor del trabajo humano y la autogestión).

En fin, se enterraba cualquier proyecto neodesarrollista y se instauraba en su lugar un contrarreformismo miope, orientado a sostener el resquebrajado statu quo, lo que de paso beneficiaba a los sectores conservadores tecnoburocráticos y del capital financiero que habían adquirido una fuerte representación en la cúpula del PLN y llegaron a controlar la maquinaria de sus dos administraciones últimas.

Quedaba así trazada una línea de avances sin precedentes del neoliberalismo y del "partido" pronorteamericano local, con sus secuelas de grave deterioro social y de la calidad de vida del pueblo, persistente estancamiento económico, radicalismo ideológico de la derecha e indeterminación política en el centro. Pero hay algo más que permite explicar todavía mejor el por qué de la ambigua o contradictoria coyuntura que atraviesan el gobierno y el país, y que podría dar al traste con la posición de eje del PLN dentro del sistema de partidos vigente.

En efecto, cuando apenas se perfilaba la anteriormente delineada estrategia neoconservadora, dentro y fuera de las filas de la socialdemocracia local, se produjo entre 1981-1982 un cambio en el ajedrez norteamericano a nivel de Centroamérica y varió la ubicación de Costa Rica, creciendo su importancia política, ideológica, militar y estratégica. Y como existía el afán paralelo de atraer recursos financieros blandos o donaciones de la AID y otros organismos externos, para seguir conjugando la emergencia económica, la administración Monge giraba solicitudes en ese sentido, pero teniendo que ofrecer a cambio pruebas de aceptación y colaboración con las políticas norteamericanas, lo que implicaba que el gobierno costarricense tuviera que jugar un papel agresivo frente a Nicaragua, aceptar ser asilo y base de operaciones de la "contra", y poner en ejecución drásticos programas de "reajuste estructural" que variaban el modelo de desarrollo, que imponían nuevas limitaciones a la acción, autonomía y tamaño del Estado, considerado como un improductivo obstáculo al libre accionar del mercado, las empresas privadas y los medios de

comunicación a su servicio y, lo más importante, que daban más y más fuerza al nacimiento de un nuevo bloque de poder como garantía de consolidación del proyecto neoliberal.

La nueva derecha

Este bloque neo-oligárquico en pleno ascenso, domina y desplaza a los partidos políticos cuando lo quiere y está modificando al antiguo centro político formado por la Segunda República. En su lugar está colocando su propia amalgama de políticos, tecnócratas, comunicadores, exportadores de productos no tradicionales, negociadores de deuda externa, banqueros y especuladores privados, dirigentes de cámaras patronales y otros grupos corporativos, jerarcas de una vasta y bien financiada red de organismos particulares creados por la AID para reforzar al bloque y movilizar sus propios recursos, y un grupo de renovados ideólogos de derecha, dedicados a legitimar las nuevas realidades.

Actuando a través de los mass media y entre bambalinas a nivel de las élites del poder, el nuevo bloque empuja al PLN y al actual gobierno hacia la derecha, hacia un alineamiento con Estados Unidos y sus círculos mas conservadores y militaristas, hacia la no-integración económica - y menos política - con Centroamérica, hacia el rechazo de la neutralidad proclamada defensivamente por el presidente Monge en 1983, y si pudiera también contra los avances que con gran esfuerzo personal del presidente Arias, se han logrado a partir de los acuerdos de Esquipulas II.

Este bloque es el que trata de mover la opinión publica en favor de una militarización, una policía más agresiva y mayor tolerancia a los grupos paramilitares de derecha, al tiempo que ataca con potentes persecusiones, orquestadas desde los medios de comunicación, a los sectores reformistas, pacifistas y tolerantes de todos los partidos políticos, sindicatos, universidades, asociaciones culturales y progresistas, a los cuales se acusa de desviación ideológica, de corrupción, o de mantener vínculos con las fuerzas insurgentes centroamericanas, el sandinismo, Cuba, la URSS y, más recientemente, con el narcotráfico, la drogadicción y los agentes transmisores del SIDA.

En el curso de 1988, el escenario aparece todavía más ambiguo. El nuevo bloque ha tratado de minar las bases de apoyo internas y externas del plan de paz, sepultar la proclama de neutralidad e impedir su legalización, intensificar las tensiones con Nicaragua y, sobre todo, echar por tierra cualquier esfuerzo por impulsar proyectos nacionales alternativos. Tanto los presidentes Monge como Arias han debido

enfrentar las constantes agresiones y presiones orquestadas por los dirigentes neooligárquicos para que Costa Rica se alinee con El Salvador, Honduras y Guatemala, para instrumentar la política confrontacionista de la Casa Blanca, en contraposición con las orientaciones más moderadas que promueve la Comunidad Económica Europea. Tratar de que la pauta del desarrollo económico-social se aleje lo más posible del igualitarismo y los modelos participativos, lo cual implica que se lancen permanentemente ofensivas contra los sindicatos y demás organizaciones populares, como las cooperativas, que ofrecen resistencias al proyecto neoliberal y a la "taiwanización" del país.

Lo paradójico es que, cuanto más tercamente las autoridades que manejan la política económica estatal se empeñen en mantener su actual estrategia más favorecidos se verán los sectores del bloque elitista, más debilitado se hallará el gobierno y el PLN en sus bases sociales y más probable será una derrota electoral de este que lance el péndulo más hacia la derecha extrema y guerrerista.

Futuro gris

Al presidente Arias casi sólo le quedará como alternativa refugiarse defensivamente, como ya lo ha hecho, en los logros (limitados) de su iniciativa de paz centroamericana y de una política exterior que corre el riesgo de ser realineada, en función de los designios norteamericanos menos inclinados hacia la diplomacia. También quedará reducido a seguir explotando su imagen personal como premio Nobel de la Paz y como un solitario cruzado, desesperadamente aferrado a la tesis de que la guerra y el militarismo es un mal negocio, porque anulan los esfuerzos para reactivar las economías y el flujo positivo de la inversión extranjera y el turismo. El problema, con esta estrategia de derechización interna y pacifismo externo, es que sus resultados se anulan recíprocamente, máximo si en el resto de la región los intereses vinculados a los conflictos armados encuentran que tienen mejores posibilidades de satisfacerse por la vía de la guerra y no por medio de negociaciones pacificadoras.

Más aún, conforme Costa Rica siga aplicando las medidas del "reajuste estructural" que la separan de los esfuerzos que se hacen para instalar un nuevo esquema integracionista centroamericano, mientras más dependa de los aportes financieros de la administración norteamericana como ha tenido que hacerlo desde 1982, lo más difícil será que se acerque a los demás países del istmo y que pueda constituirse en su guía hacia un modelo de desarrollo más democrático, igualitario, participativo, integrado y autónomo. Los restantes países centroamericanos, a su vez se distan-

ciarán más entre sí, buscando nuevas formas de bilateralismo con Estados Unidos y bloqueando cualquier chance de Nicaragua de ofrecer un modelo distinto de desarrollo económico-social. Los intentos unionistas de Guatemala, a través del proyecto de Parlamento Centroamericano y el fortalecimiento de los organismos de la integración, pasarían a la historia. Este es un panorama un tanto pesimista, pero factible.

Lo más preocupante de esta contradictoria coyuntura, para el futuro del gobierno actual y del PLN, es que se estanquen y naufraguen los acuerdos de Esquipulas II, con lo cual languidecería la imagen y el poder personal del presidente Arias, se reducirían sus márgenes de negociación hacia afuera y hacia adentro, y avanzaría incontrolado el nuevo bloque de poder hasta derrotar al PLN en las próximas elecciones, tratando de dividirlo o desprestigiarlo al máximo, por medio de una bien planificada campaña de escándalos de corrupción y acusaciones de ineficacia político-administrativa, la cual pareciera hallarse ya en marcha, a raíz de denuncias que vinculan a algunos de sus dirigentes con el narcotráfico y el "lavado" de dólares.

La instalación del PUSC por varios años o períodos en el gobierno, podría representar una radicalización de la opción neoliberal, con dudosa lealtad democrática, una polarización ideológica, con incremento del descontento social, y una aceleración de la marcha espartana hacia una especie de modelo combinado de "uruguayización" con "taiwanización" que pondría fin a la antigua polis centroamericana, la cual algunos pensaron una vez que podría haber llegado a ser una verdadera Suiza o el país mas homogéneamente desarrollado de América Latina.

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad Nº 97 Septiembre- Octubre de 1988, ISSN: 0251-3552, **<www.nuso.org>.**